

Corrupción, impunidad e inseguridad ciudadana

Escrito por Roberto Rubio-Fabián

rubiofabian@funde.org

La corrupción y la impunidad tienen una dimensión ética: hay robo o apropiación ilícita de bienes ajenos; se afectan servicios públicos al que el ciudadano tiene derecho; se contribuye a hacer más pobres a los pobres; es causa de muerte (por ejemplo cuando un edificio mal construido, producto de una licitación amañada, se derrumba ante un terremoto).

Pero la corrupción y la impunidad tienen otras dimensiones, ubicadas en el campo del desarrollo. Quizá el impacto más estudiado es el económico ocasionado por la corrupción. Hay muchos análisis que evidencian el impacto negativo de esta sobre la inversión, la productividad, la tasa de crecimiento, el déficit fiscal, etcétera.

También la corrupción y la impunidad impactan negativamente el medio ambiente, por ejemplo cuando se cobran comisiones para otorgar permisos de construcción en zonas no permitidas, no se toman medidas para mejorar la calidad del combustible y evitar la contaminación atmosférica debido a “favores” recibidos de compañías petroleras, por los mismos motivos se es permisivo ante la contaminación de ríos que realizan ciertas empresas. Existen impactos políticos nefastos sobre el ejercicio democrático cuando se compran diputados/as, o impactos sobre la seguridad militar cuando el soborno penetra secretos militares. Incluso hay impactos socioculturales, pues la corrupción y la impunidad generan comportamientos sociales indeseables como la agresividad, la frustración, el resentimiento, la desconfianza, etcétera.

Adicionalmente, existen impactos de la corrupción y la impunidad sobre la seguridad ciudadana, el crimen y la violencia; una relación por cierto poco estudiada. Sin embargo hay algunas referencias importantes al tema. En la investigación realizada por FUSADES/Universidad de Salamanca, titulada “Las Instituciones Democráticas en El Salvador: valoración de rendimientos y Plan de Fortalecimiento (junio de 2005) se afirmaba: “Ningún Estado puede desarrollar adecuadamente sus objetivos en un contexto de impunidad por las desviaciones o malversaciones de dinero público realizadas por sus autoridades”. Sin duda los objetivos del Estado para combatir la criminalidad se incluyen en ello.



“La lucha contra la corrupción e impunidad debe ser pieza esencial e integral de las estrategias de combate a la criminalidad.”

Recientemente, José Miguel Cruz, respetado intelectual salvadoreño, director de Investigaciones del Centro de Latinoamérica y del Caribe de la Universidad Internacional de Florida, en entrevista hecha por la sección Séptimo Sentido de LA PRENSA GRÁFICA (6 de septiembre de 2015), afirmaba: “No podés implementar un plan de seguridad, de combate a la inseguridad, con los niveles tan altos de corrupción y de penetración del crimen organizado en las instituciones del país, en las instituciones de seguridad y políticos del país”.

Ciertamente, la corrupción y la impunidad dentro de las instituciones estatales, especialmente de las encargadas de la seguridad y la justicia, limita sus recursos, capacidades, el accionar y alcance de sus estrategias o políticas para combatir el crimen y la violencia. La corrupción y la impunidad dentro de instituciones claves como la policía, la fiscalía, los jueces, los centros penales, las aduanas, el ejército, etcétera, las vuelve porosas al crimen organizado y sensible a sus intereses y encantos, con lo que la intervención efectiva y eficiente de estas instancias estatales se ve disminuida o anulada. Como consecuencia de esta fragilidad institucional, la persecución de la corrupción más bien se vuelve un arma del poder de turno para difamar o atacar a sus opositores, o proteger a los propios, como bien lo sabe hacer la Secretaría de Participación, Transparencia y anti Corrupción y su órgano de propaganda Transparencia Activa.

La opacidad, la corrupción y la impunidad, al relajar instituciones como aduana, migración, ejército, puede favorecer el contrabando de armas y pertrechos que van a parar a manos de las pandillas y las fortalece. Mientras que a un centro penal carcomido por la corrupción le será difícil evitar que funcionen como centros de operaciones del crimen organizado. La impunidad por su parte es un detonante de violencia, resentimiento y frustración que estimula comportamientos agresivos y aislacionistas por parte de la población. Aspectos todos ellos que no contribuyen al combate del crimen organizado y reducción de la violencia.

En fin, la lucha contra la corrupción e impunidad debe ser pieza esencial e integral de las estrategias de combate a la criminalidad. Sin ello, estas están condenadas tarde o temprano al fracaso.

